



Examinada su solicitud de informe, remitida a este Gabinete Jurídico, referente al Anteproyecto de Ley de Supervisión de los Seguros Privados, solicitado de esta Agencia Española de Protección de Datos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 h) de la Ley Orgánica, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y 5 b) del Estatuto de la Agencia, aprobado por Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, cúmpleme informarle lo siguiente:

Antes de entrar a analizar el texto sometido a informe es preciso señalar que, habida cuenta de la fundamentación legal del informe que inmediatamente va a evacuarse y su carácter preceptivo, a tenor de lo dispuesto en las normas que acaban de señalar, debería indicarse en la Exposición de Motivos de la norma que la misma ha sido sometida al previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos.

I

Tal y como indica el artículo 1 del Anteproyecto sometido a informe el mismo tiene por objeto “la regulación y supervisión de la actividad aseguradora privada comprendiendo las condiciones de acceso y ejercicio, y el régimen de saneamiento y liquidación de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, con la finalidad principal de proteger los derechos de los tomadores, asegurados y beneficiarios, así como promover la transparencia y el desarrollo de la actividad aseguradora”.

Se procede así a la reforma del Régimen de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, hasta ahora contenido en el Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, introduciéndose así mismo determinadas modificaciones en el Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2009, de 29 de noviembre, en el Texto Refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre y la Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados.

El nuevo Régimen establecido en el Anteproyecto sometido a informe regula de forma más detallada que el actualmente vigente las obligaciones de las entidades aseguradoras, especialmente en lo referido a sus condiciones financieras de capital exigible y de solvencia, así como las derivadas de la existencia de grupos de entidades aseguradoras, a fin de transponer al derecho interno las obligaciones reguladas exhaustivamente en la Directiva 2009/138/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el Seguro de Vida, el acceso a la actividad de seguro y reaseguro y su ejercicio, conocida tradicionalmente como Directiva de Solvencia II.



Además, y siguiendo lo establecido en la citada Directiva, el Anteproyecto regula de forma sumamente detallada las potestades de supervisión otorgadas a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en su condición de autoridad supervisora a los efectos previstos en esta normativa, regulando, entre otras materias, el acceso por parte de la Autoridad Supervisora a las informaciones necesarias y adecuadas para el correcto ejercicio de sus funciones de supervisión, el deber de confidencialidad de aquélla en el tratamiento de la información a la que accediera en el desempeño de tales competencias y los supuestos en que dicha información podrá ser objeto de comunicación a otras autoridades administrativas o a autoridades de supervisión de otros Estados.

Por lo que respecta al análisis del Anteproyecto desde la perspectiva de la aplicación de las normas reguladoras del Derecho fundamental a la protección de datos, contenidas en la Ley Orgánica 15/1999 y su Reglamento de Desarrollo, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 20 de diciembre, será preciso diferenciar entre las previsiones relacionadas con el tratamiento de la información por parte de la Autoridad supervisora y aquellas otras relacionadas con el tratamiento de datos llevado a cabo por las propias entidades supervisadas. En este sentido, cabe apreciar que mientras en el primero de los casos el Anteproyecto establece detalladamente el Régimen de tratamiento y cesión de datos por parte de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, las normas relacionadas con el segundo de los supuestos se limitan al artículo 124 del Anteproyecto, que reproduce literalmente las previsiones actualmente contenidas en el Texto Refundido en relación con la creación de ficheros comunes (artículo 25.4 del Texto Refundido) y la cesión de datos por el asegurador directo al reasegurador (artículo 58 bis.9, párrafo segundo del Texto Refundido).

Por todo ello, el presente informe tendrá dos partes claramente diferenciadas: en la primera se analizarán las normas del Proyecto relacionadas con el tratamiento de datos en el ámbito de la Función supervisora analizando su conformidad con la legislación vigente en materia de Protección de datos; en la segunda, se hará referencia al mencionado artículo 124 y a las propuestas que correspondiera efectuar en relación con la posible inclusión en el Anteproyecto de determinadas previsiones aclaratorias de la legitimación y alcance del tratamiento de datos de carácter personal por parte de las entidades aseguradoras y la posible cesión, en su caso, de dichos datos.

II

Como se ha señalado, el Anteproyecto establece una serie de obligaciones de información que las entidades aseguradoras deberán suministrar a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para el adecuado ejercicio de su actividad supervisora. A título de ejemplo, diversos preceptos se refieren a la necesaria valoración por parte del citado supervisor



de la concurrencia de los requisitos de idoneidad y honorabilidad en los socios, administradores y directivos de las entidades; asimismo, el artículo 18.7 impone la comunicación al supervisor de la existencia de vínculos estrechos de las entidades con otras personas o entidades.

También los artículos 56 y 57 hacen referencia al deber de designación de representantes por parte de las entidades aseguradoras domiciliadas en otros Estados miembros que pretendan operar en España en régimen de libre prestación de servicios, exigiéndose igualmente en el artículo 49 la comunicación de los datos de altos cargos o representantes de entidades aseguradoras que ejerzan sus actividades en España en régimen de derecho de establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios. Igualmente, a título de ejemplo el artículo 100 impone la comunicación al supervisor de determinadas informaciones que contendrán datos personales para la evaluación de la adquisición de participaciones significativas, a fin de enjuiciar su idoneidad y solidez financiera.

Igualmente deberán notificarse a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones las operaciones significativas realizadas dentro de grupos respecto de los cuales aquélla tenga la condición de supervisor, según indica el artículo 196.2. Por último, el artículo 222 exige la valoración de la honorabilidad, cualificación y experiencia profesional de los liquidadores.

Los deberes de información a los que se ha hecho ejemplificativamente referencia con anterioridad aparecen resumidos en lo dispuesto en el artículo 143 del Anteproyecto, en el que se indica lo siguiente:

“1. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras suministrarán a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones la documentación e información que sean necesarias a efectos del ejercicio de las funciones de supervisión, ya mediante su presentación periódica en la forma que reglamentariamente se determine, ya mediante la atención de requerimientos individualizados que les dirija la citada Dirección General, incluidos los que tengan lugar en el curso de las actuaciones inspectoras.

La información incluirá, al menos, la que resulte necesaria para las siguientes actuaciones en el marco del proceso de supervisión:

a) para evaluar el sistema de gobierno de las entidades, la actividad que desarrollan, los principios de valoración aplicados a efectos de solvencia, los riesgos asumidos y los sistemas de gestión de riesgos, así como la estructura de su capital, sus necesidades de capital y su gestión;

b) para tomar las decisiones pertinentes en el ejercicio de las facultades de supervisión.



2. *La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá requerir cualquier información relativa a los contratos en poder de intermediarios o a los contratos celebrados con terceros. Asimismo, podrá solicitar información a auditores de cuentas, actuarios y otros expertos externos de las entidades.*

3. *La información a que se refieren los apartados 1 y 2 comprenderá datos cualitativos o cuantitativos, ya sean datos históricos, actuales o previstos, y ya procedan de fuentes internas o externas, o cualquier combinación adecuada de ellos, y se ajustará a los siguientes principios:*

a) deberá reflejar la naturaleza, la envergadura y la complejidad de la actividad de la entidad y, en particular, los riesgos inherentes a dicha actividad;

b) deberá ser accesible, comparable y coherente en el tiempo y estar completa en todos sus aspectos significativos;

c) deberá ser pertinente, fiable y comprensible.

4. *Las entidades aseguradoras y reaseguradoras deberán disponer de sistemas y estructuras apropiados para cumplir los requisitos establecidos en los apartados 1 a 4, así como de una política escrita, aprobada por el órgano de administración de la entidad, que garantice la continua adecuación de la información presentada.”*

Del mismo modo, respecto de las entidades que realizaran actividades externalizadas por cuenta de las compañías aseguradoras o reaseguradoras, el artículo 144.1 añade que las mismas facilitarán la información relativa a sus funciones o actividades a las propias entidades aseguradoras o reaseguradoras, a los auditores de cuentas y a la Dirección General de Seguros y Fondos de pensiones que conforme al apartado 2 podrá desarrollar sus actividades de supervisión en los locales de los prestadores de servicios ubicados en otro Estado miembro por sí misma o por medio de personas que designen al efecto, previo informe a las autoridades competentes de dicho estado.

En el ámbito de la actuación inspectora de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, el párrafo segundo del artículo 152.1 del Anteproyecto indica que los funcionarios de la Inspección “Para el correcto ejercicio de sus funciones podrán examinar los libros, registros y documentos, sea cual fuere su soporte, incluidos los programas informáticos y los archivos magnéticos, ópticos o de cualquier otra clase, relativos a las operaciones de la entidad, en los términos en que se desarrolle reglamentariamente. Asimismo podrá pedir que les sea presentada o entregada una copia a los efectos de su incorporación en el informe de inspección, y aquella estará obligada a ello y a darles las máximas facilidades para el desempeño de su cometido. Si la



persona o entidad inspeccionada tuviera motivos fundados, podrá oponerse a la entrega de una copia de la documentación, aduciendo sus razones por escrito para su incorporación en el informe de inspección”.

Las previsiones contenidas en los preceptos que acaban de reproducirse implicarán una cesión de datos de carácter personal por parte de los distintos sujetos obligados por el Anteproyecto a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en su condición de autoridad supervisora. Dichas cesiones deberían resultar conformes a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, cuyo apartado 1 dispone que “Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”. No obstante, el consentimiento no será preciso en caso de que la cesión se encuentre amparada por una norma con rango de Ley, tal y como dispone el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica teniendo además en cuenta que el artículo 10.2 a) del Reglamento entiende que concurre la habilitación legal “El tratamiento o la cesión tengan por objeto la satisfacción de un interés legítimo del responsable del tratamiento o del cesionario amparado por dichas normas, siempre que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales de los interesados previstos en el artículo 1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre” o cuando “El tratamiento o la cesión de los datos sean necesarios para que el responsable del tratamiento cumpla un deber que le imponga una de dichas normas”.

Como es sabido, esta Agencia Española de Protección de Datos a puesto reiteradamente de manifiesto que la mera inclusión en un anteproyecto de Ley de una habilitación para el tratamiento y cesión de datos de carácter personal no puede ser considerada por sí misma suficiente para que por esta Agencia se entienda dicha previsión como legitimadora del tratamiento sobre la simple base de la aplicación del artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999. Por el contrario, para que dicha habilitación obtenga el informe favorable de esta Agencia sería preciso que la misma resultase coherente con los principios consagrados en la Ley Orgánica y, particularmente, los de finalidad y proporcionalidad previstos en su artículo 4, cuyo apartado 1 dispone que “Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”, añadiendo el apartado 2 que “Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos”.

El capítulo 3 de la Directiva 2009/138 se refiere a los principios generales aplicables a las autoridades de supervisión. Tras establecerse en el artículo 34 las facultades generales de supervisión, dicha Directiva establece en su artículo 35.1 que “Los Estados miembros exigirán a las empresas de



seguros y de reaseguros que presenten a las autoridades de supervisión la información que sea necesaria a efectos de supervisión. Dicha información incluirá, al menos, la que resulte necesaria para las siguientes actuaciones en el marco del proceso a que se refiere el artículo 36:

- a) para evaluar el sistema de gobernanza aplicado por las empresas, la actividad que desarrollan, los principios de valoración aplicados a efectos de solvencia, los riesgos asumidos y los sistemas de gestión de riesgos, así como la estructura de su capital, sus necesidades de capital y su gestión del mismo;
- b) para tomar las decisiones pertinentes en el ejercicio de sus derechos y obligaciones de supervisión.”.

Además, el artículo 35.5 establece terminantemente que “Los Estados miembros exigirán a las empresas de seguros y de reaseguros que dispongan de sistemas y estructuras apropiados para cumplir los requisitos establecidos en los apartados 1 a 4, así como de una política escrita, aprobada por el órgano de administración, dirección o supervisión de la empresa de seguros o de reaseguros, que garantice la continua adecuación de la información presentada”.

Quiere todo ello decir que la propia normativa comunitaria, tras especificar las competencias supervisoras de las autoridades establecidas a tal efecto en los distintos Estados miembros, prevé expresamente como herramienta imprescindible para el ejercicio de la función supervisora el acceso a toda la información necesaria para el adecuado cumplimiento de esas competencias. Por todo ello, y sin perjuicio del necesario análisis que inmediatamente habrá de efectuarse en lo referente al uso de la información, cabe concluir que las distintas comunicaciones de datos previstas a lo largo del Anteproyecto y resumidas en la regla general contenida en el artículo 143 resultan conformes a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999.

III

Como se ha señalado, la licitud de la cesión y el consiguiente tratamiento de datos por parte de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones no exime del necesario cumplimiento de los principios consagrados en la Ley Orgánica 15/1999. En particular, los datos así tratados deberán ser únicamente utilizados para las finalidades que justificaron su cesión y posterior tratamiento, debiendo además darse cumplimiento por parte del responsable al deber de secreto regulado por el artículo 10 de la Ley Orgánica, según el cual “El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo”. Por último, los datos únicamente

podrían ser objeto de cesión y comunicación a terceros en los supuestos en que así lo permita el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999.

El artículo 156.1 del Anteproyecto dispone que “Salvo los datos inscribibles en el registro administrativo al que se refiere el artículo 36, los datos, documentos e informaciones que obren en poder del Ministerio de Economía y Hacienda en virtud de cuantas funciones le encomienda esta ley tendrán carácter reservado”, añadiendo en su párrafo segundo que “Todas las personas que ejerzan o hayan ejercido una actividad de ordenación y supervisión de entidades aseguradoras y reaseguradoras, así como aquellas a quienes el Ministerio de Economía y Hacienda haya encomendado funciones respecto de dichas entidades, tendrán obligación de guardar secreto profesional sobre las informaciones confidenciales que reciban a título profesional en el ejercicio de tal función. El incumplimiento de esta obligación determinará las responsabilidades penales y las demás previstas por las leyes. Estas personas no podrán prestar declaración ni testimonio ni publicar, comunicar o exhibir datos o documentos reservados, ni siquiera después de haber cesado en el servicio, salvo permiso expreso otorgado por el órgano competente del Ministerio de Economía y Hacienda. Si dicho permiso no fuera concedido, la persona afectada mantendrá el secreto y quedará exenta de la responsabilidad que de ello emane”.

Dichas previsiones vendrían a garantizar la confidencialidad en el tratamiento de la información y el uso de la misma para las finalidades supervisoras, debiendo igualmente tenerse en cuenta que en las que corresponden al Ministerio de Economía y Hacienda el artículo 156.1 añade en su párrafo tercero que “El Ministerio de Economía y Hacienda sólo podrá utilizar la información confidencial para el ejercicio de las potestades de supervisión que le encomienda esta ley”.

No obstante, de lo dispuesto en el párrafo segundo parece derivarse la posibilidad de que quienes accedieran a la información pudieran hacer uso de la misma en caso de que le fuera otorgado permiso expreso por el órgano competente del Ministerio de Economía y Hacienda. En relación con esta habilitación es preciso señalar que no parece ser causa suficiente para el tratamiento de los datos con una finalidad distinta a la supervisora o para la cesión que pudiera derivarse de la divulgación de esa información, siendo preciso nuevamente recordar que la habilitación legal para el tratamiento o cesión de los datos debería resultar respetuosa con el principio de finalidad previsto en el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 15/1999.

De este modo, sería preciso que el Anteproyecto clarificase que la autorización a la que se refiere el artículo 156.1 del Anteproyecto en su párrafo segundo no permitirá en ningún caso la utilización o divulgación de datos de carácter personal. Por ello se propone completar la frase a la que ahora se está haciendo referencia, resultando su tenor el siguiente: “Estas personas no podrán prestar declaración ni testimonio ni publicar, comunicar o exhibir datos o



documentos reservados, ni siquiera después de haber cesado en el servicio salvo permiso expreso otorgado por el órgano competente del Ministerio de Economía y Hacienda **que en ningún caso podrá referirse a datos de carácter personal**".

IV

Al propio tiempo, el apartado 2 del artículo 156, así como los artículos 157 y 158 se refieren a la posible cesión de datos, como excepción al deber de secreto, enumerándose una serie de supuestos en los que dicha cesión o comunicación podría tener lugar. Estas normas se completan con los deberes de intercambio de información entre autoridades de supervisión a los que se refieren los artículos 166.1 y 168.1 del Anteproyecto. Por último, el artículo 16.1 se refiere al deber de colaboración con otras autoridades competentes de las Comunidades Autónomas.

En similares términos a los ya indicados en el apartado II de este informe, para que dichas cesiones resulten conformes a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 será necesario que las mismas se ajusten al régimen establecido en el artículo 11 de la citada Ley, así como, cuando las cesiones se produzcan entre Administraciones Públicas, al artículo 21.1, que en la redacción resultante de la Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre, dispone que "Los datos de carácter personal recogidos o elaborados por las Administraciones Públicas para el desempeño de sus atribuciones no serán comunicados a otras Administraciones Públicas para el ejercicio de competencias diferentes o de competencias que versen sobre materias distintas, salvo cuando la comunicación tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos".

En relación con gran parte de las cesiones contenidas en los preceptos a los que ahora se está haciendo referencia, esta Agencia tuvo ya ocasión de pronunciarse acerca de su legitimidad en el informe emitido en fecha 16 de septiembre de 2004 al entonces Proyecto de Real Decreto Legislativo por el que se aprobaba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, indicando en dicho informe lo siguiente:

"(...) debe hacerse referencia al deber de secreto previsto en el artículo 75 del Proyecto, que reproduce, con las debidas modificaciones aclaratorias, lo establecido en la Ley 30/1995, con las reformas operadas por la Ley 44/2002.

Según el primer apartado del mencionado precepto, "Salvo lo dispuesto en el artículo 74, los datos, documentos e informaciones que obren en poder del Ministerio de Economía y Hacienda en virtud de cuantas funciones le encomienda la presente Ley tendrán carácter reservado", añadiendo que "Todas las personas que ejerzan o hayan ejercido una



actividad de ordenación y supervisión de entidades aseguradoras, así como aquéllas a quienes el Ministerio de Economía y Hacienda haya encomendado funciones respecto de las mismas, tendrán obligación de guardar secreto profesional sobre las informaciones confidenciales que reciban a título profesional en el ejercicio de tal función”, subsistiendo el deber de secreto incluso cuando estas personas hubieran cesado en su actividad.

Posteriormente, los apartados 2 y 3 del artículo 75 establecen una serie de supuestos en que será posible la comunicación de los datos de los que disponga el Ministerio de Economía y Hacienda. En estos supuestos, sin perjuicio del hecho de que la comunicación viene amparada por lo ya establecido en la Ley 30/1995 y en la Ley 44/2002, es preciso que la cesión resulte conforme a la finalidad que la justifica, tal y como impone el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999, a cuyo tenor “Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”.

Pues bien, en estos supuestos la comunicación se encuentra amparada por lo establecido en los distintos apartados del artículo 11.2 de la Ley Orgánica 15/1999 o por el hecho de que la comunicación habrá sido sometida a un previo proceso de disociación de los datos, por lo que no exigirá los requisitos exigidos por la Ley al no contener datos de carácter personal (artículo 11.6 de la misma).

Así, los supuestos previstos en el apartado 2 del artículo 75 se encuentran amparados no sólo en el hecho de ya venir recogidos en una norma con rango de Ley, sino en los artículos 11.1 (apartado a), 11.2 d) (apartados c), d) y e)) y 11.6 (apartado b) de la Ley Orgánica.

Del mismo modo, las excepciones contempladas en los apartados tercero y quinto traen causa de la normativa comunitaria (apartado a) e internacional (apartado 5), de las funciones inspectoras atribuidas por la Ley al Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores y Entes Supervisores (apartado b) y al Consorcio de Compensación de Seguros (apartado c), en los términos que esta Agencia ya indicó al informar el anteproyecto de la posterior Ley 44/2002, de la regulación de prevención del blanqueo de capitales (apartado d) y de la existencia de una relación contractual de auditoría de cuentas o de las competencias del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (apartado e).

En consecuencia, el contenido del artículo 75 resulta conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, si bien debería considerarse la posibilidad de incluir un inciso final en la letra b) del apartado 3, lo que se



considera admisible a la vista del alcance de la delegación efectuada, en el sentido de hacer referencia en dicho precepto a “El Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y los demás Entes encargados de la ordenación y supervisión de las cuentas y de la solvencia de entidades, en los términos establecidos en sus Leyes reguladoras”, habida cuenta del principio de reserva de Ley exigible en cuanto a la comunicación de los datos, según lo establecido en la Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre, y el hecho de que la comunicación a la que se refiere el precepto no puede entenderse realizada de modo genérico, sino en los términos establecidos en la propia normativa reguladora de estas instituciones.”

En similares términos deberá ahora indicarse que las cesiones a las que se refieren los artículos 156.2 y 157 se encuentran amparadas en lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, bien por contarse con el consentimiento del interesado, bien por ampararse en una norma con rango de Ley (como sucede en los supuestos contenidos en los apartados e) y f) del artículo 156.2 y en los previstos en el artículo 157), bien por realizarse a las autoridades a las que se refiere el artículo 11.2 d) de la Ley Orgánica (apartados c, d y e del artículo 156.2) bien por llevarse a cabo con fines históricos, científicos o estadísticos (apartado b del artículo 156.2)

En cuanto al intercambio de información con las autoridades autonómicas, ya se señaló que el artículo 16.3 del Anteproyecto indica que “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.6ª, 11ª y 13ª de la Constitución, corresponde al Estado el alto control económico-financiero de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. A estos efectos, las órganos competentes de las Comunidades Autónomas remitirán, cuando sea solicitada por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y, en todo caso, anualmente, la información y documentación de cada entidad a que se refieren los artículos 99.2 y 143.1. Asimismo, las Comunidades Autónomas facilitarán a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones el acceso mediante medios electrónicos a la información relativa a sus registros administrativos de entidades aseguradoras y reaseguradoras”, debiendo considerarse que en el presente caso se trata de una cesión de información entre Administraciones Públicas que ejercen una misma competencia.

Por lo que respecta al intercambio de información con otras autoridades, el artículo 65 de la Directiva 2009/138/CE dispone que “El artículo 64 no será obstáculo para el intercambio de información entre autoridades de supervisión de diferentes Estados miembros. Dichas informaciones estarán sujetas a la obligación de secreto profesional contemplada en el artículo 64”, añadiendo a su vez el artículo 249 las normas de intercambio de información y cooperación entre las distintas autoridades supervisoras en relación con las empresas de seguros y reaseguros que formen parte de un grupo. De este modo, además de tratarse de organismos supervisores que desarrollan unas mismas competencias, la cesión de los datos a la que estamos haciendo referencia en

el ámbito de la Unión Europea resultará conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999.

Por último, en relación con la cesión de datos a autoridades supervisoras de terceros países el artículo 158.1 del Anteproyecto dispone que “Los acuerdos de cooperación en los que se prevea el intercambio de información con las autoridades competentes para la supervisión de las entidades aseguradoras, reaseguradoras y demás entidades financieras o con otras autoridades u órganos de terceros países requerirán que la información suministrada quede protegida por garantías de secreto profesional al menos equivalentes a las contempladas en el artículo 156, y que el intercambio de información tenga por objeto el cumplimiento de las labores de supervisión de dichas autoridades”, añadiendo el apartado 2 del mismo precepto que “Cuando la información tenga su origen en otro Estado miembro no podrá ser revelada sin la conformidad expresa de las autoridades competentes que la hayan facilitado y, en su caso, únicamente con la finalidad para la que dichas autoridades hayan dado su conformidad”.

En este caso nos encontramos ante una cesión de datos de carácter personal que implicará así mismo una transferencia internacional de dichos datos, debiendo, tanto una como otra, resultar conformes a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, lo que exige que exista además una causa que exima de la necesidad de autorización del Director de la Agencia Española de Protección de Datos para que la transferencia pueda tener lugar de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Orgánica.

El párrafo primero del artículo 66 de la Directiva 2009/138/CE establece que “Los Estados miembros únicamente podrán celebrar acuerdos de cooperación en los que se prevea el intercambio de información con las autoridades de supervisión de terceros países o con las autoridades u órganos de terceros países, según se definen en el artículo 68, apartados 1 y 2, si la información que vaya a ser comunicada queda protegida por garantías de secreto profesional al menos equivalentes a las contempladas en la presente sección. Dicho intercambio de información deberá tener por objeto el cumplimiento de la labor de supervisión de las autoridades u órganos en cuestión”. Por su parte, el artículo 34 h) de la Ley Orgánica 15/1999 exime de la exigencia de la autorización del Director de la Agencia las transferencias internacionales cuando las mismas sean las necesarias o legalmente exigidas para la salvaguarda del interés público.

En el supuesto en el que se viene haciendo referencia se está regulando la cesión de los datos a entidades supervisoras de la actividad aseguradora en terceros países no pertenecientes a la Unión Europea imponiendo la exigencia de que se adopten las garantías de confidencialidad al menos equivalente a las previstas en la propia norma sometida a informe y limitándose asimismo la transmisión a que la misma tenga por finalidad el cumplimiento de la función supervisora atribuida a la entidad destinataria de los datos.



Teniendo en cuenta todo lo anterior y la existencia de una norma comunitaria que ampara expresamente la transmisión de información en estos casos, cabe concluir que las previsiones del artículo 158, así como en los términos ya vistos las de los artículos 156 y 157, resultan conformes a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999.

V

Por otra parte, el artículo 36 del Anteproyecto regula el registro administrativo que será llevado por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y en el que se inscribirán, conforme al apartado 1:

- “a) Las entidades aseguradoras y reaseguradoras españolas, así como quienes lleven la dirección efectiva de estas entidades, los responsables de las funciones que integran el sistema de gobierno de las entidades y los socios con una participación significativa en la entidad aseguradora o reaseguradora.*
- b) Los grupos y subgrupos supervisados por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de acuerdo con lo previsto en el título V.*
- c) Las entidades de la Unión Europea que operen en España en régimen de derecho de establecimiento o libre prestación de servicios y sus apoderados o representantes, así como quienes lleven la dirección efectiva de estas sucursales.*
- d) Las sucursales de entidades aseguradoras o reaseguradoras de terceros países autorizadas en España, así como sus apoderados o representantes y las personas que lleven la dirección efectiva de estas sucursales.*
- e) Las agencias de suscripción autorizadas en España, sus socios y quienes lleven su dirección efectiva.*
- f) Las organizaciones para la distribución de la cobertura de riesgos entre entidades aseguradoras o para la prestación de servicios comunes relacionados con su actividad, y sus altos cargos.”*

Para el cumplimiento de los deberes de inscripción, el artículo 36.2, tras señalar que “Reglamentariamente se determinarán los actos inscribibles en relación con las personas y entidades a las que se refiere el apartado anterior, quienes deberán facilitar la documentación e información necesarias para la inscripción de los actos que se determinen y para mantener actualizado el registro”, indica que “A estos efectos, remitirán a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones los documentos, datos y demás informaciones



en la forma y plazos que reglamentariamente se determinen, sin perjuicio de la obligación de atender también los requerimientos individualizados de información que se les formulen”.

Por último, el artículo 36.3 señala que “El Registro administrativo será público. Los interesados podrán acceder a los datos inscritos, teniendo en cuenta que el acceso a datos de carácter personal se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal”.

Los artículos 49 y 63 del Anteproyecto se refieren igualmente a la inscripción en el registro de entidades aseguradoras domiciliadas en otros estados de la Unión Europea que ejerzan sus actividades en España en régimen de establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios, con indicación de sus altos cargos y representantes, así como de las sucursales de entidades aseguradoras y reaseguradoras de terceros países.

En cuanto a los actos inscribibles, el Anteproyecto únicamente prevé la inscripción en el registro de las sanciones impuestas a las entidades salvo la consistente en amonestación privada conforme al artículo 243.3.

Esta Agencia ya se pronunció acerca de la legitimidad del registro al que ahora se está haciendo referencia en el informe emitido en fecha 16 de septiembre de 2004 al entonces Proyecto de Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. Igualmente, el registro fue objeto de análisis en el informe emitido a instancia de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en fecha 19 de junio de 2009, en el que se planteaba por aquel centro directivo “la íntegra publicación en la página web de la consultante de la totalidad de las informaciones contenidas en los registros públicos”, señalando aquél que “cabe considerar que además de ser de carácter público se presume interés en quien los consulta y se permite al ciudadano constatar que aquel sobre el que se consulta está en su caso autorizado o habilitado para ejercer una determinada función que está sujeta a autorización”.

En el mencionado informe se analizaba el sometimiento del registro a la normativa de protección de datos teniendo en cuenta la incidencia que pudiera derivarse de la aprobación del Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, en los siguientes términos:

“Hecha la anterior referencia general, es preciso efectuar una primera precisión en relación con la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica 15/1999 al supuesto sometido a consulta, dado que conforme a lo establecido en el primer párrafo de su artículo 2.1 “la presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los



sectores público y privado”, siendo dato de carácter personal “Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”, como dispone su artículo 3 a).

En el mismo sentido, el artículo 2.2 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, dispone en el primer inciso de su artículo 2.2 que las normas de protección de datos no serán de aplicación a las personas jurídicas.

En consecuencia, la cuestión planteada no se encuentra sujeta a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 y su normativa de desarrollo en cuanto la misma se refiera a información referida a personas jurídicas, lo que sucederá en gran medida en relación con el contenido de los registros a los que se refiere la consulta.

En segundo lugar, el artículo 2.3 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que “los datos relativos a empresarios individuales, cuando hagan referencia a ellos en su calidad de comerciantes, industriales o navieros, también se entenderán excluidos del régimen de aplicación de la protección de datos de carácter personal”.

En relación con los datos de empresarios individuales y la aplicabilidad del artículo 2.3 del Reglamento, el informe de esta Agencia de 18 de febrero de 2008 indicaba lo siguiente:

“(…) cabe considerar que los datos referidos a los empresarios individuales y que aparecen exclusivamente ligados a su actividad comercial o mercantil, o que identifican, aún con su nombre y apellidos un determinado establecimiento o la marca de un determinado producto o servicio, como consecuencia de la existencia de una libre decisión empresarial adoptada en este sentido, no se encuentran sometidos a la protección conferida por la Ley Orgánica 15/1999. Este es el criterio recogido por el artículo 2.3 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999.

Al propio tiempo, el tratamiento ha de llevarse a cabo en el ámbito empresarial. Quiere ello decir que a los efectos del tratamiento de los datos, la finalidad perseguida por quien trata el dato es la de recabar y mantener información sobre la empresa y no sobre el comerciante que la ha constituido.

Así, el tratamiento de los datos del empresario individual, con las limitaciones que se han venido señalando, para mantener una relación comercial con el mismo, podría encontrarse amparado



por el artículo 2.3 del Reglamento, en conexión con las normas de la Ley Orgánica 15/1999 que se han venido indicando.

Sin embargo, no podrá considerarse amparado por el precepto, y en consecuencia excluido de la aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, el tratamiento de los datos del comerciante llevado a cabo no con la finalidad de mantener una relación empresarial con el establecimiento u organización que el mismo hubiera creado, sino para conocer la información del propio sujeto organizado en forma de empresa, siendo el destinatario del tratamiento no la empresa sino el propio empresario en tanto, por ejemplo, que consumidor individual.

En consecuencia, de lo que ha venido indicándose cabrá extraer dos conclusiones determinantes del alcance de lo dispuesto en el artículo 2.3 del Reglamento:

- Cabrá considerar que la legislación de protección de datos no es aplicable en los supuestos en los que los datos del comerciante sometidos a tratamiento hacen referencia únicamente al mismo en su condición de comerciante, industrial o naviero; es decir, a su actividad empresarial.*
- Al propio tiempo, el uso de los datos deberá quedar limitado a las actividades empresariales; es decir, el sujeto respecto del que pretende llevarse a cabo el tratamiento es la empresa constituida por el comerciante industrial o naviero y no el empresario mismo que la hubiese constituido. Si la utilización de dichos datos se produjera en relación con un ámbito distinto quedaría plenamente sometida a las disposiciones de la Ley Orgánica.”*

De todo ello se desprende que cuando la información contenida en el Registro, cuya finalidad es la de dar publicidad a las entidades y empresas debidamente autorizadas para el desarrollo de las actividades vinculadas a las funciones supervisoras de la consultante, se refieran a personas jurídicas o a empresarios individuales, apareciendo en este caso las informaciones vinculadas exclusivamente al ejercicio de su actividad empresarial, las normas de protección de datos no serían aplicables a los registros objeto del presente informe.

El problema se plantea en relación con aquellos registros en los que junto con la información mencionada se incluyan igualmente datos relacionados con personas físicas que presten determinados servicios



en las entidades supervisadas, como sucederá en relación con la inclusión de datos de altos cargos, incluyendo los administradores, consejeros, directores generales o asimilados, quienes lleven a cabo la dirección efectiva de las entidades o sus apoderados, respecto de los que se inscribirán datos referidos a su nombramiento, suspensión, revocación, cese, inhabilitación o sanciones impuestas, así como la indicación de su nacionalidad, profesión, número del documento nacional de identidad o documento equivalente, tal y como se señala en la consulta.

En estos casos, podría plantearse la aplicación del artículo 2.2 del Reglamento, que prevé que no serán aplicables las normas de protección de datos a los ficheros que se limiten a incorporar los datos de las personas físicas que presten sus servicios en personas jurídicas y consistan “únicamente en su nombre y apellidos, las funciones o puestos desempeñados, así como la dirección postal o electrónica, teléfono y número de fax profesionales”.

La Agencia Española de Protección de Datos, en el ya citado informe de 18 de febrero de 2008 señalaba que:

“(...) la Agencia ha venido señalando que en los supuestos en que el tratamiento del dato de la persona de contacto es meramente accidental en relación con la finalidad del tratamiento, referida realmente a las personas jurídicas en las que el sujeto presta sus servicios, no resulta de aplicación lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, viniendo el Reglamento a plasmar este principio.

No obstante, nuevamente, es necesario que el tratamiento del dato de la persona de contacto sea accesorio en relación con la finalidad perseguida. Ello se materializará mediante el cumplimiento de dos requisitos:

El primero, que aparece expresamente recogido en el Reglamento será el de que los datos tratados se limiten efectivamente a los meramente necesarios para identificar al sujeto en la persona jurídica a la que presta sus servicios. Por este motivo, el Reglamento impone que el tratamiento se limite a los datos de nombre y apellidos, funciones o puestos desempeñados, dirección postal o electrónica, teléfono y número de fax profesionales”.

De este modo, cualquier tratamiento que contenga datos adicionales a los citados se encontrará plenamente sometido a la Ley Orgánica 15/1999, por exceder de lo meramente imprescindible para identificar al sujeto en cuanto contacto de quien realiza el tratamiento con otra empresa o persona jurídica.



Por ello, no se encontrarían excluidos de la Ley los ficheros en los que, por ejemplo, se incluyera el dato del documento nacional de identidad del sujeto, al no ser el mismo necesario para el mantenimiento del contacto empresarial. Igualmente, y por razones obvias, nunca podrá considerarse que se encuentran excluidos de la Ley Orgánica los ficheros del empresario respecto de su propio personal, en que la finalidad no será el mero contacto, sino el ejercicio de las potestades de organización y dirección que a aquél atribuyen las leyes.

El segundo de los límites se encuentra, como en el supuesto contemplado en el artículo 2.3, en la finalidad que justifica el tratamiento. Como se ha venido indicando reiteradamente, la inclusión de los datos de la persona de contacto debe ser meramente accidental o incidental respecto de la verdadera finalidad perseguida por el tratamiento, que ha de residenciarse no en el sujeto, sino en la entidad en la que el mismo desarrolla su actividad o a la que aquél representa en sus relaciones con quienes tratan los datos.

De este modo, la finalidad del tratamiento debe perseguir una relación directa entre quienes traten el dato y la entidad y no entre aquéllos y quien ostente una determinada posición en la empresa. De este modo, el uso del dato debería dirigirse a la persona jurídica, siendo el dato del sujeto únicamente el medio para lograr esa finalidad.

Así sucedería en caso de que el tratamiento responda a relaciones “business to business”, de modo que las comunicaciones dirigidas a la empresa, simplemente, incorporen el nombre de la persona como medio de representar gráficamente el destinatario de la misma. Por el contrario, sin la relación fuera “business to consumer”, siendo relevante el sujeto cuyo dato ha sido tratado no sólo en cuanto a la posición ocupada sino como destinatario real de la comunicación, el tratamiento se encontraría plenamente sometido a la Ley Orgánica 15/1999, no siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 2.2 del Reglamento.”

Teniendo en cuenta lo que acaba de indicarse, los datos referidos a las personas físicas que se incorporasen a los registros a los que se refiere la consulta sí se encontrarían sometidos a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999.”

Por otra parte, en cuanto a la legitimación para la cesión de datos derivada de la publicación de los mismos en la página web de la Dirección General, el informe indicaba lo siguiente:



“(…) en relación con los registros a los que se refiere la Ley de Ordenación y supervisión de los seguros privados, el segundo párrafo del artículo 74.1 dispone que “Estos registros administrativos expresarán las circunstancias que reglamentariamente se determinen y serán públicos para quienes acrediten interés en su conocimiento”.

Por su parte, en lo que respecta a la regulación contenida en la Ley 26/2006, su artículo 52.1 establece en su último párrafo que “eeste Registro administrativo expresará las circunstancias que reglamentariamente se determinen y los ciudadanos podrán acceder a él en los términos regulados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”.

Por tanto, las normas con rango de Ley aplicables a los registros analizados no establecen un acceso ilimitado a los datos que los mismos contienen, sino que condicionan dicho acceso a la acreditación de la concurrencia en el solicitante de un interés legítimo en conocer el contenido del registro o a la aplicación de lo dispuesto en la Ley 30/1992 y, en particular, en su artículo 37.

Por tanto, no es posible concluir que el interés en la consulta del registro pueda presumirse, debiendo acreditarse por el solicitante y valorarse por el órgano responsable del Registro, es decir, por la consultante, sin que sea posible establecer un principio general e acceso indiscriminado a toda la información de los citados registros.

En consecuencia, la publicación de la totalidad de la información referida a personas físicas que se contenga en los registros a los que se refiere la consulta, lo que implicará el acceso a dicha información sin ningún tipo de restricción por cualquier persona que consultase el sitio web de la consultante, no se encuentra amparada por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, al ser necesario que se valore, con carácter previo al acceso a la información, la concurrencia en el solicitante de la misma de un interés que justifique esa consulta.”

Teniendo en cuenta estas conclusiones, y considerando conforme a la Ley Orgánica 15/1999 lo dispuesto en los dos primeros apartados del artículo 36, debe ahora analizarse el alcance de la cesión a la que se refiere el tercero de los apartados, alcanzándose una conclusión similar a la que se derivaba del informe emitido en el año 2009.

En efecto, el Anteproyecto señala por una parte que el acceso a los datos de carácter personal está sometido a la Ley Orgánica 15/1999 y, por otra, prevé el carácter público del registro, pero limitado a “los interesados”. No estableciéndose en el Anteproyecto la naturaleza del interés que determinará la condición de interesado, sería preciso para delimitar aquélla acudir al concepto

establecido en la Ley 30/1992, cuyo artículo 31.1 dispone que se considerarán interesados en el procedimiento administrativo:

- “a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.*
- b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.*
- c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva”*

Teniendo estas circunstancias en cuenta, y así como en lógico reconocimiento que el Anteproyecto hace del sometimiento del registro a la Ley Orgánica 15/1999, cabe concluir que el acceso al registro quedará limitado a quienes efectivamente acrediten interés legítimo en conocer el contenido del mismo.

En caso de que fuera otra la voluntad del legislador será necesario que se proceda a la modificación del texto, clarificando si el interés será presumible en quien solicite el acceso al registro, lo que exigirá asimismo delimitar claramente qué datos deberán resultar accesibles a la vista de la finalidad que pretenda darse a la publicidad.

En consecuencia, el artículo 36.3 no establece un nuevo sistema de legitimación para el acceso al Registro, siendo preciso para que el mismo pueda tener lugar una modificación del texto anteriormente incluido en el Anteproyecto que sólo será acorde a la Ley Orgánica si delimita con precisión la finalidad de la publicidad registral, acotando los datos accesibles en función de dicha finalidad.

VI

Debe ahora hacerse referencia a algunas de las previsiones incluidas en el Anteproyecto y relacionadas con el tratamiento o cesión de datos por parte de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en los supuestos de modificación por el Anteproyecto de otras normas actualmente vigentes.

En primer lugar, la Disposición final tercera modifica en su apartado uno el artículo 24 del Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, siendo relevantes a los efectos del presente informe los apartados 4 y 6 de dicho precepto, relacionados respectivamente con el suministro de datos a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y el deber de confidencialidad y cesiones de dichos datos por parte de la citada Dirección General.

Conforme al artículo 24.4 “La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá recabar de las entidades gestoras y depositarias, de las entidades o personas en las que hayan delegado o externalizado funciones, de los comercializadores de planes de pensiones, de los promotores de los planes de pensiones, de las comisiones de control, de los actuarios, así como de los representantes de los fondos de pensiones de otros Estados miembros, toda la información que sea precisa para comprobar el correcto cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias”, añadiendo que “Las personas y entidades referidas en el párrafo anterior, y en especial las entidades gestoras de fondos de pensiones, deberán suministrar a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones documentación e información que sean precisas para la supervisión, ya mediante la presentación periódica en la forma que reglamentariamente se determine, ya mediante la atención de requerimientos individualizados que les dirija la citada Dirección General, incluidos los que tengan lugar en el curso de las actuaciones inspectoras”.

Por su parte, según el artículo 24.6:

“Los datos, documentos e informaciones que obren en poder del Ministerio de Economía y Hacienda en el ejercicio de sus funciones de supervisión de los fondos de pensiones, salvo los contenidos en los registros administrativos de carácter público, tendrán carácter reservado.

Todas las personas que ejerzan o hayan ejercido una actividad de supervisión en materia de fondos de pensiones, así como aquellas a quienes el Ministerio de Economía y Hacienda haya encomendado funciones respecto de las mismas, están sometidas al deber de secreto profesional en los mismos términos y con las mismas responsabilidades y excepciones establecidas en el capítulo VI del título IV de la Ley de Supervisión de los Seguros Privados”.

Las obligaciones y limitaciones a la cesión derivadas de estos preceptos resultan coincidentes con las que se han venido analizando en lugares anteriores de este informe en relación con el ejercicio de la potestad supervisora de los seguros privados, por lo que su mera traslación a la supervisión de los Planes y Fondos de Pensiones ha de considerarse igualmente conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999.

Por su parte, la Disposición final quinta del Anteproyecto modifica el artículo 47 de la Ley 26/2006, de 27 de julio, de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados, indicando en el apartado 3 de dicho precepto que:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.6ª, 11ª y 13ª de la Constitución corresponde al Estado el alto control económico-financiero de los mediadores de seguros y de los corredores de reaseguros. Deberá mantenerse la necesaria colaboración entre la Administración



General del Estado y la de la Comunidad Autónoma respectiva a los efectos de homogeneizar la información documental y coordinar, en su caso, las actividades de ordenación y supervisión de ambas administraciones.

A estos efectos, las Comunidades Autónomas facilitarán a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones el acceso mediante medios telemáticos a la información relativa a sus registros administrativos de mediadores de seguros y de los corredores de reaseguros, que deberá estar actualizada, y le remitirán, con una periodicidad anual, la información estadístico contable a que se refiere el artículo 49, relativa a los corredores de seguros y a los corredores de reaseguros inscritos en dichos registros. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones establecerá la información o datos mínimos que necesariamente deben transmitirle las Comunidades Autónomas.”

Debe tenerse en cuenta en relación con este precepto que el artículo 21.1 de la Ley Orgánica 15/1999, en su redacción actual dispone que “Los datos de carácter personal recogidos o elaborados por las Administraciones Públicas para el desempeño de sus atribuciones no serán comunicados a otras Administraciones Públicas para el ejercicio de competencias diferentes o de competencias que versen sobre materias distintas, salvo cuando la comunicación tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos”. De este modo, dado que las competencias de las Administraciones cedente y cesionaria son coincidentes, la cesión prevista en este precepto se encuentra amparada por el artículo 21.1 de la Ley Orgánica.

VII

Como se indicó al comienzo de este informe, una vez analizados los tratamientos y cesiones de datos relacionados con el ejercicio de la actividad supervisora, es preciso hacer ahora referencia a los tratamientos que llevarán a cabo las compañías que integran el sector asegurador.

Respecto de dichos tratamientos, como se indicó en un lugar anterior, el Anteproyecto sometido a informe se limita a recoger en su artículo 124 los supuestos ya recogidos en el actual Texto Refundido, haciendo referencia así a la creación de ficheros comunes y a la cesión de datos al reasegurador por parte del asegurador directo.

En cuanto al primero de dichos supuestos, el artículo 124, reproduciendo íntegramente el artículo 25.4 del actual Texto Refundido, establece en sus tres primeros apartados lo siguiente:

1. Las entidades aseguradoras podrán establecer ficheros comunes que contengan datos de carácter personal para la liquidación de siniestros y



la colaboración estadístico actuarial para permitir la tarificación y selección de riesgos y la elaboración de estudios de técnica aseguradora. La cesión de los citados datos no requerirá el consentimiento previo del afectado, pero sí la comunicación a éste de la posible cesión de sus datos personales a ficheros comunes para los fines señalados, con expresa indicación del responsable, para que se puedan ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación previstos en la ley.

2. También podrán establecerse ficheros comunes cuya finalidad sea prevenir el fraude en el seguro sin que sea necesario el consentimiento del afectado. No obstante, será necesaria en estos casos la comunicación al afectado, en la primera introducción de sus datos, de quién sea el responsable del fichero y de las formas de ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación.

3. En todo caso, los datos relativos a la salud sólo podrán ser objeto de tratamiento con el consentimiento expreso del afectado.”

Esta Agencia en su informe de 16 de septiembre de 2004, emitido en relación con el Anteproyecto de Real Decreto Legislativo de aprobación del citado Texto Refundido señalaba, a su vez, lo siguiente:

“Como ya se ha indicado, el precepto reproduce lo ya dispuesto en las normas objeto de refundición, por lo que no cabe efectuar objeciones a su contenido, si bien sí se considera necesario realizar los siguientes comentarios:

- En primer lugar, desde el punto de vista de la aplicación práctica de la norma, y sin perjuicio del necesario cumplimiento de los deberes de información y, en su caso, consentimiento, a los que la misma se refiere, así como del reconocimiento del ejercicio por los afectados de los derechos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, debe recordarse que los datos contenidos en los ficheros creados a tal efecto únicamente podrán ser empleados para las finalidades enumeradas en los párrafos segundo y tercero del artículo 25.3, dado lo establecido en el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 15/1999, reproducido en un lugar anterior de este informe.*
- En segundo lugar, debería hacerse referencia junto con los derechos de acceso, rectificación y cancelación ya citados en los párrafos segundo y tercero, al derecho de oposición, reconocido en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 15/1999, sin perjuicio de que el mismo sea o no concedido a quien lo ejercite.*



- *Por último, y sin perjuicio de que resulta admisible la inclusión de estos tres párrafos como integrantes del apartado 3 del artículo 25 del Proyecto, dada su relación con la fijación de las tarifas y la razonabilidad de los cálculos actuariales, así como con los principios consagrados en el párrafo primero del artículo, cabría plantearse la posibilidad de convertir estos tres párrafos en un apartado separado, bien como apartado 4, bien como apartado 6 del artículo 25.”*

Similar conclusión debe alcanzarse en el presente momento, en el sentido de considerar necesaria la inclusión del derecho de oposición en el catálogo de derechos a los que se refiere el precepto y en el hecho de considerar que los tres párrafos del precepto deben configurar un único apartado a menos que constituyan un artículo independiente, dado que no guardan relación con el apartado 4, referido al reaseguro, siendo así que parece deducirse del mantenimiento de tres apartados separados o bien la inexistencia de cierta identidad entre los tres ahora analizados o bien la existencia de una similitud que realmente no concurre entre estos tres apartados y el numerado como 4.

En cuanto al artículo 124.4, dispone que “Las entidades aseguradoras podrán comunicar a las entidades reaseguradoras, sin consentimiento del tomador del seguro o asegurado, los datos que sean estrictamente necesarios para la celebración del contrato de reaseguro, en los términos previstos en el artículo 77 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro”.

Debe recordarse que el citado precepto fue introducido por la reforma operada como consecuencia de la aprobación de la Ley 26/2006, habiendo sido esta Agencia la que su informe al Anteproyecto de dicha Ley, de 30 de marzo de 2005, propuso el establecimiento de dicha legitimación para la cesión de datos, en los siguientes términos:

“En este sentido, debe tenerse en cuenta que la Directiva 2002/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, sobre el seguro de vida, y la Directiva 2002/12/CE por ella derogada, tienen en consideración la importancia del reaseguro contratado por la entidad aseguradora para el cálculo del margen de solvencia de las entidades, pudiendo incluso la contratación del mismo influir en la modificación del cálculo de dicho margen.

En el mismo sentido se pronuncia la Directiva 2002/23/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de marzo de 2002, por la que se modifica la Directiva 73/239/CEE del Consejo en lo que respecta a los requisitos del margen de solvencia de las empresas de seguros distintos del seguro de vida.



Asimismo, el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, impone en su artículo 25 que “En los ramos de enfermedad, de defensa jurídica, de asistencia y de decesos, en los que la entidad aseguradora se propone garantizar la prestación de una asistencia, el programa de actividades deberá contener, además de lo previsto en el artículo 12 de la Ley y en el artículo 24 de este Reglamento, indicaciones y justificaciones relativas a la capacidad para prestar los servicios a los que se comprometa en los contratos. A estos efectos deberán presentar, en su caso, los siguientes documentos (...) b) Contrato de reaseguro de prestación de servicios con una entidad aseguradora debidamente autorizada para operar en el Espacio Económico Europeo y que haya justificado ante la Dirección General de Seguros o ante la autoridad de control de su domicilio social si éste radica en el Espacio Económico Europeo, la capacidad para prestar los servicios”.

El propio Reglamento establece cautelas similares a las posteriormente establecidas en las Directivas citadas en cuanto a la consideración del reaseguro en el cálculo del margen de solvencia de las entidades, previsto en el artículo 17 del Texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre.

A la vista de todo lo que acaba de indicarse, no puede negarse la importancia que para el adecuado ejercicio de la actividad aseguradora reviste la contratación del reaseguro con terceras entidades, lo que, en ocasiones, y dentro de los límites estrictos del contrato de reaseguro, debería justificar la cesión a la reaseguradora de los datos imprescindibles para la celebración del contrato.

Como ya se ha indicado, el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999 habilita la cesión de los datos sin contar con el consentimiento del afectado en caso de que la cesión se encuentre habilitada por una Ley.

Si bien podría considerarse que las exigencias contenidas en las Directivas 2002/13/CE y 2002/23/CE habilitaría la cesión de datos a las entidades reaseguradoras, dada la práctica exigencia de la contratación de esta modalidad, sería recomendable que esta circunstancia constase expresamente en el ordenamiento español, lo que podría conseguirse mediante la inclusión de una disposición adicional en el Anteproyecto objeto del presente informe que, por una parte, habilitara la comunicación de datos de la aseguradora a la reaseguradora y, por otra, limitase claramente las finalidades que justificarían la cesión a las derivadas de la celebración del contrato de reaseguro.



Por ello, se propone la inclusión de una nueva disposición adicional séptima en el Anteproyecto, con el siguiente contenido:

“Disposición adicional séptima. Tratamiento de datos en caso de contrato de reaseguro.

El asegurador directo podrá comunicar al reasegurador, sin consentimiento del tomador o del asegurado, los datos que sean estrictamente necesarios para la celebración del contrato de reaseguro, en los términos previstos en el artículo 77 de la Ley 20/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.

La cesión de dichos datos para cualquier finalidad distinta de la establecida en el párrafo anterior requerirá el consentimiento del interesado.””

A nuestro juicio, el segundo párrafo de los sugeridos entonces por la Agencia resulta esencial para determinar la concurrencia en la cesión del principio de finalidad y limitar la legitimación para el tratamiento incontestado de los datos a los supuestos que el propio precepto prevé, por lo que nuevamente se sugiere su inclusión en el texto final de la norma.

VIII

Junto con las previsiones efectivamente incluidas en el texto del Anteproyecto sometido a informe existen otras, relativas a los tratamientos de datos por parte de las entidades aseguradoras cuya inclusión podría aportar seguridad jurídica en la determinación de los supuestos en los que concurre o no causa suficiente legitimadora de los citados tratamiento y que podría ser conveniente incluir en el Anteproyecto sometido a informe. Asimismo, podría resultar relevante la inclusión de reglas específicas que pudiesen clarificar con precisión los límites de los citados tratamientos a fin de evitar situaciones de vulneración de las disposiciones de protección de datos por parte de tales compañías o a determinar la naturaleza jurídica de determinadas figuras reguladas por el texto desde la perspectiva de la aplicación de la Ley Orgánica 15/1999 y sus normas de desarrollo.

En lo que afecta a la legitimación para el tratamiento de datos de carácter personal por parte de las entidades aseguradoras puede hacerse referencia a dos cuestiones que han planteado un mayor número de dudas por parte de las entidades y que han originado la intervención de esta Agencia Española de Protección de Datos: en primer lugar, las relativas al tratamiento de datos de terceras personas directamente afectadas por el contrato de seguro pero que no intervienen en su celebración, tales como el asegurado no tomador o el beneficiario, así como el tercero perjudicado en los seguros de responsabilidad civil, tales como el seguro obligatorio de vehículos de motor; en segundo términos, el tratamiento de datos de salud en determinadas

modalidades, como los datos del perjudicado al que acaba de hacerse referencia o los datos del propio asegurado en caso de seguros de asistencia sanitaria.

En cuanto a la primera de las cuestiones a las que se ha hecho referencia, esta Agencia ha venido considerando que el tratamiento de datos de personas vinculadas al contrato de seguros aun no participando en su proceso de formación puede entenderse amparado en lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 15/1999. Así, por ejemplo, en relación con los beneficiarios, en el informe de 1 de octubre de 2008 se señalaba lo siguiente:

“Respecto de la licitud del tratamiento de los datos del beneficiario en el caso de que éstos hayan sido designados por los asegurados, facilitados, lógicamente por el cliente que suscribe la póliza, el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que “El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa”. No obstante, señala el artículo 6.2 de la Ley que “No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal (...) se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento”.

La Agencia Española de Protección de Datos ha venido considerando que en supuestos no idénticos al presente, pero con los que podría entenderse que el mismo guarda cierta relación de semejanza, la referencia a las “partes” de una relación jurídica, prevista en el artículo 6.2 puede considerarse asimilada a los “elementos personales” de dicha relación, de modo que cuando la relación es formalizada por un afectado en beneficio de un tercero, el tratamiento de los datos de éste, que resulta necesario para la adecuada formalización de la relación, podría considerarse amparado por la Ley Orgánica 15/1999.

En este sentido, se ha considerado que el tratamiento de los datos del beneficiario de un seguro de vida se encuentra amparado por lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 15/1999, aún cuando el beneficiario no haya prestado su consentimiento al tratamiento.

Ahora bien, debe recordarse que el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que “Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido, añadiendo el artículo 4.2 que “Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos”.



De este modo, el tratamiento de los datos sólo será posible en cuanto resulte necesario para la entrega al beneficiario de la indemnización pactada y demás derechos al sobrevenir la muerte del trabajador asegurado, no pudiendo utilizarse los datos del destinatario para ninguna otra finalidad distinta de la de proceder a dicha entrega.”

Este mismo criterio sería predicable de otros sujetos vinculados al contrato que aun no siendo partes signatarias del mismo sí son elementos personales de aquél, tales como el asegurado no tomador o el tercero perjudicado, así como los derechohabientes de aquéllos.

Si bien sería posible mantener simplemente el criterio hasta ahora sustentado, la garantía del principio de seguridad jurídica obliga a esta Agencia a promover que en la reforma operada a través del Anteproyecto ahora sometido a informe se incluya alguna previsión que permita completar la interpretación hasta ahora mantenida, legitimando expresamente el tratamiento de datos sin el consentimiento de los afectados siempre dentro de la finalidad de mantenimiento de la relación jurídica derivada del contrato o para el cumplimiento de las obligaciones impuestas en el propio Anteproyecto.

Del mismo modo, la regla debería precisarse con otra que pusiera de manifiesto la necesidad de contar con el consentimiento de los interesados para el tratamiento de sus datos con cualquier otra finalidad distinta de las que se acaban de describir con anterioridad, a fin de igualmente evitar que el establecimiento de una habilitación legal pudiera inducir a las entidades a considerar lícito cualquier tratamiento de estos datos.

Por ello, se propone la inclusión en el Anteproyecto de una norma en la que se establezca lo siguiente:

“Las entidades aseguradoras podrán tratar los datos de los tomadores, asegurados, beneficiarios o terceros perjudicados, así como de sus derechohabientes sin necesidad de contar con su consentimiento a los solos efectos de garantizar el pleno desenvolvimiento del contrato de seguros y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley y sus disposiciones de desarrollo.

El tratamiento de los datos de las personas antes indicadas para cualquier finalidad distinta de las especificadas en el párrafo anterior deberá contar con el consentimiento específico de los interesados.”

IX

La segunda de las cuestiones a las que se ha hecho referencia es la relacionada con el tratamiento en el ámbito asegurador de los datos



relacionados con la salud de las personas, con especial referencia a dos supuestos: el tratamiento de los datos del perjudicado en un seguro de responsabilidad civil y el tratamiento por parte de la compañía aseguradora de asistencia sanitaria de los datos derivados de la efectiva prestación de dicha asistencia.

En cuanto al primero de los citados supuestos, esta Agencia tuvo la ocasión de analizar la cuestión, considerando el tratamiento amparado en el artículo 11.2 a) en su Resolución de 11 de agosto de 2003, confirmada posteriormente por Sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de septiembre de 2005. La citada sentencia desestima el recurso interpuesto contra la citada resolución de archivo de actuaciones dictada por la Agencia, al entender que no resultaba contraria a la Ley Orgánica 15/1999 la cesión por un centro sanitario de datos de carácter personal relacionados con la salud del perjudicado en un accidente de circulación a la compañía aseguradora del causante del accidente que había satisfacer la indemnización del seguro de responsabilidad civil de vehículos a motor, al considerar que existía habilitación legal suficiente para ello. Así, señala la Sentencia que:

“Puesto que (A) actuaba por cuenta de (B), conviene ante todo destacar que la Sra. Cristina no tenía concertado un seguro con (B) sino que su relación con este empresa aseguradora era la de «tercero perjudicado», circunstancia que no puede ser ignorada a la hora de determinar la incidencia que pueda tener en el ámbito de la protección de datos personales la normativa reguladora del contrato de seguro.

La Agencia de Protección de Datos y las partes demandadas en el proceso enumeran con algún detenimiento algunas de las obligaciones que la legislación reguladora de seguro privado impone a las compañías aseguradoras, tanto las que se refieren a efectividad y prontitud en el abono de las indemnizaciones (artículo 18 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro), como las relativas a la constitución y mantenimiento de provisiones técnicas suficientes (artículo 16.1 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de seguros privados) o a la llevanza del libro de siniestros (artículo 65 del Reglamento aprobado por Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre) y demás documentos y registros que deben tener a disposición de la Inspección de Seguros para que ésta pueda realizar sus cometidos de supervisión de la actividad y control financiero (artículos 70 a 72 de la mencionada Ley 30/95). Y para el cumplimiento de tales obligaciones el asegurador tiene que realizar las investigaciones y peritaciones precisas sobre la existencia del siniestro y la entidad de los daños. Partiendo de tales premisas, las resoluciones de la Agencia de Protección de Datos - tanto la originaria de 11 de agosto de 2003 como la que vino a confirmarla en reposición- completan el razonamiento en los siguientes términos:



«... De todo lo expuesto se concluye que, tanto desde la perspectiva de las obligaciones del asegurador contenidas en la Ley 50/1980 como desde las derivadas de la Ley 30/1995, las entidades aseguradoras deben recabar y conservar, en su caso, información relativa a la salud de los terceros que deban ser indemnizados como consecuencia de un seguro de responsabilidad civil. De ahí que debe entenderse que concurren las excepciones al tratamiento de tales datos sin consentimiento del afectado previstas en los artículos 6.1, 7.3 y 11, 2.a/ de la LOPD».

(...)

En consecuencia, la actividad de las compañías aseguradoras está plenamente sujeta a las disposiciones de la LOPD, entre otras las relativas a la calidad y exactitud de los datos (artículo 4 LOPD), el derecho de información en la recogida de los datos (artículo 5) y la exigencia del consentimiento del afectado para el tratamiento y la comunicación de sus datos (artículos 6 y 11 LOPD). Pero, claro es, este régimen legal sobre protección de datos es aplicable en su integridad, es decir, son aplicables las exigencias y garantías establecidas con carácter general en esos preceptos pero también los supuestos de dispensa o exoneración que la propia normativa contempla.

(...)

Ahora bien, junto a esa dispensa del consentimiento prevista para cuando existe una relación contractual o comercial -que, según acabamos de ver, no se da en el caso que nos ocupa- la normativa sobre protección de datos determina que el consentimiento del afectado no será exigible para el tratamiento de los datos personales, y tampoco para su cesión o comunicación a un tercero, cuando así lo establezca una Ley (artículos 6.1 in fine y 11.2.a/ de la LOPD). Es cierto que los preceptos antes citados de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, y de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de seguros privados, no establecen expresamente una dispensa o exoneración de la exigencia del consentimiento prevista en la normativa sobre protección de datos pero también lo es que en dichos preceptos se imponen a las compañías aseguradoras unas obligaciones sustantivas y formales que presuponen o requieren el tratamiento de datos personales de los perjudicados.”

En cuanto al segundo de los supuestos analizados, frente a lo señalado en el anterior, esta Agencia no ha encontrado una causa suficiente legitimadora del tratamiento de los datos de salud del asegurado en asistencia sanitaria a la entidad aseguradora, por cuanto si bien dicha cesión podría considerarse amparada en la existencia de una relación jurídica entre el asegurado y la entidad aseguradora, y en consecuencia, amparada en el artículo 11.2 c) de la Ley Orgánica 15/1999, no es posible aplicar dicho precepto, habida cuenta del hecho de que el tratamiento de datos de salud queda excluido de esa norma,



siendo sólo lícito el amparado por una norma con rango de Ley o el que cuente con el consentimiento expreso del interesado, y en este caso, a lo sumo, existiría un consentimiento presunto del afectado derivado de la propia firma del contrato de seguro. En este sentido se pronunciaba el informe de esta Agencia de 21 de julio de 2004.

Por este motivo, en colaboración con el sector y con la propia Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, se elaboró por esta Agencia una cláusula de consentimiento que habría de ser aceptada por el asegurado tanto en el momento de la firma del contrato como en cada concreto supuesto de asistencia sanitaria en la que se clarificaba expresamente que en caso de no prestarse el consentimiento no se llevaría a cabo la asistencia requerida, al ser necesario para aquélla que se consintiera la transmisión de los datos a las entidades aseguradoras.

En esa misma cláusula se aclaraba que los datos objeto de cesión serían únicamente los imprescindibles para el adecuado cumplimiento de la cobertura contratada y que dichos datos no podrían ser utilizados para ninguna otra finalidad distinta de las derivadas del contrato.

Teniendo en cuenta lo anterior, a fin de garantizar nuevamente la seguridad jurídica y permitir el tratamiento de estos datos en supuestos en los que el establecimiento de una limitación para el tratamiento de los datos relacionados con la salud de las personas resulta contraria a la propia esencia del contrato celebrado, se propone la inclusión de un nuevo apartado en el Anteproyecto, en que se señale lo siguiente:

“Las entidades aseguradoras podrán tratar sin consentimiento del interesado los datos relacionados con su salud en los siguientes supuestos:

- a) Para la determinación de la asistencia sanitaria que hubiera debido facilitarse al perjudicado cuando la misma haya de ser satisfecha por la entidad.**
- b) Para el adecuado abono a los prestadores sanitarios o el reintegro al asegurado o sus beneficiarios de los gastos de asistencia sanitaria que se hubieran llevado a cabo en el ámbito de un contrato de seguro de asistencia sanitaria.**

El tratamiento de los datos se limitará en estos casos a aquéllos que resulten imprescindibles para el abono de la indemnización o la prestación derivada del contrato de seguro. Los datos no podrán ser objeto de tratamiento para ninguna otra finalidad, sin perjuicio de las obligaciones de información establecidas en esta Ley.



Las entidades aseguradoras deberán informar al asegurado, beneficiario o al tercero perjudicado acerca del tratamiento y, en su caso, de la cesión de sus datos de salud, en los términos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.”

X

Junto con estas previsiones relativas a la legitimación para el tratamiento de datos de carácter personal por las entidades aseguradoras, es preciso hacer referencia a otras dos normas que deberían ser tenidas en consideración por aquéllas en el tratamiento de los datos de carácter personal y que han dado lugar a la tramitación de diversos procedimientos por parte de esta Agencia.

La primera, de cumplimiento más sencillo se refiere al necesario cumplimiento por las compañías del deber de información establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, cuyo apartado 1 dispone que “Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco:

- a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.
- b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas.
- c) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos.
- d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
- e) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su representante”.

Añade el apartado 2 del artículo 5 que “Cuando se utilicen cuestionarios u otros impresos para la recogida, figurarán en los mismos, en forma claramente legible, las advertencias a que se refiere el apartado anterior”.

Del mismo modo, esta regla se complementa con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento, relativa al tratamiento de datos para fines no vinculados con el propio contrato, estableciendo el precepto que “Si el responsable del tratamiento solicitase el consentimiento del afectado durante el proceso de formación de un contrato para finalidades que no guarden relación directa con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual, deberá permitir al afectado que manifieste expresamente su negativa al tratamiento o comunicación de datos” y, en particular, que “En particular, se entenderá cumplido tal deber cuando se permita al afectado la marcación de una casilla claramente visible y que no se encuentre ya marcada en el documento que se le entregue para la celebración del contrato o se establezca un procedimiento equivalente que le permita manifestar su negativa al tratamiento”.



EL artículo 118 del Anteproyecto se refiere al deber de información al tomador del seguro, remitiéndose a la normativa reguladora del contrato de seguro. A nuestro juicio, dicho deber de información debería cohonestarse con el establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, por lo que sería necesario o bien hacer referencia a tal precepto en el artículo 118 del Anteproyecto o bien introducir un apartado en el texto del Anteproyecto, en el que se señale lo siguiente:

“En la información que habrá de facilitarse al tomador del seguro conforme al artículo 118 de esta Ley deberá igualmente incorporarse la que, en relación con el tratamiento de sus datos personales, establece el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.”

La segunda de las cautelas a las que se ha hecho mención se refiere al principio de conservación de los datos de carácter personal, consagrado por el artículo 4.5 de la Ley Orgánica 15/1999, según el cual “Los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados”.

En este sentido, se han dado supuestos en la Agencia en los que se había procedido por las compañías aseguradoras a la conservación de datos facilitados por un sujeto en un momento previo a la celebración de un contrato que finalmente no tuvo lugar y que la propia compañía utilizó posteriormente, en algunos supuestos transcurrido un período superior a diez años, para resolver acerca de la celebración de un contrato posteriormente solicitado por el interesado.

En tales casos, la Agencia ha venido considerando que se ha producido un tratamiento ilícito de los mencionados datos, toda vez que se habían conservado, sin consentimiento de los interesados, durante un período de tiempo en el que debería haberse procedido a su cancelación, toda vez que los datos no eran necesarios para el desarrollo, cumplimiento o control de una relación jurídica que finalmente no había llegado a tener lugar.

Por ello, a fin de garantizar el conocimiento por parte de las entidades de sus obligaciones en lo que a la conservación de los datos se refiere, se propone la inclusión de un apartado en que se haga expresa referencia al deber de cancelación por parte de las entidades de los datos facilitados en el proceso de formación de un contrato si el mismo no llega a celebrarse. Por tanto, se propone la inclusión del siguiente texto:

“Las entidades aseguradoras deberán proceder inmediatamente a la cancelación de los datos que le hubieran sido facilitados con anterioridad a la celebración de un contrato si el mismo no llegara a



celebrarse a menos que contasen con el consentimiento específico del interesado, que deberá ser expreso si se tratase de datos relacionados con la salud.”

XI

Resta por último efectuar dos consideraciones referidas a ciertos supuestos de tratamiento de datos derivados de algunas de las previsiones de la Ley para situaciones concretas en las que, en principio, se produciría una transmisión de la información de una entidad aseguradora a otra u otras.

Así sucederá en caso de realización de actividades externalizadas, así como en los supuestos de cesión de cartera o modificaciones estructurales reguladas, estas dos últimas figuras por los artículos 103 y siguientes y 109 y siguientes del Anteproyecto, respectivamente.

Respecto al primero de los supuestos y siempre que la realización de las actividades externalizadas implique la prestación de un servicio por cuenta de la entidad aseguradoras, surgirá la figura del encargado del tratamiento, definido por el artículo 3 g) de la Ley Orgánica 15/1999 como “La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que, solo o conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento”.

En este caso, conforme al artículo 12.1 de la Ley Orgánica 15/1999 el acceso a los datos por parte del encargado no será constitutivo de cesión, quedando no obstante la actividad del encargado sujeta al régimen establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica y en el Capítulo III del Título II del Reglamento que la desarrolla, caracterizado por las siguientes especialidades:

a) En primer lugar, será preciso que la actuación del encargado del tratamiento se limite a la prestación de los servicios objeto de la contratación. A tal efecto dispone el artículo 20.1 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 que “se considerará que existe comunicación de datos cuando el acceso tenga por objeto el establecimiento de un nuevo vínculo entre quien accede a los datos y el afectado”.

b) En lo que atañe a los requisitos formales, el artículo 12.2 de la Ley Orgánica impone que “la realización de tratamientos por cuenta de terceros deberá estar regulada en un contrato que deberá constar por escrito o en alguna otra forma que permita acreditar su celebración y contenido, estableciéndose expresamente que el encargado del tratamiento únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento, que no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en dicho contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas”.



c) Por lo que respecta al periodo de conservación de los datos, el artículo 12.3 establece que “una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán ser destruidos o devueltos al responsable del tratamiento, al igual que cualquier soporte o documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento”.

Añade el artículo 20.3 del Reglamento que “no obstante, el encargado del tratamiento no incurrirá en responsabilidad cuando, previa indicación expresa del responsable, comunique los datos a un tercero designado por aquél, al que hubiera encomendado la prestación de un servicio conforme a lo previsto en el presente capítulo”. El artículo 22.1 reitera esta previsión, al indicar que “una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán ser destruidos o devueltos al responsable del tratamiento o al encargado que éste hubiese designado, al igual que cualquier soporte o documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento”.

d) Por otra parte, a fin de preservar los derechos del encargado frente a posibles responsabilidades derivadas de su actuación, dispone el artículo 22.1 del Reglamento que “el encargado del tratamiento conservará, debidamente bloqueados, los datos en tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con el responsable del tratamiento”.

e) En lo referente a la posible subcontratación de los servicios prestados, el artículo 21 del Reglamento permite esta posibilidad en caso de que el responsable del fichero apodere al encargado para la celebración del segundo contrato en nombre de aquél o cuando se den los requisitos especificados en el apartado 2 del citado precepto:

- “Que se especifiquen en el contrato los servicios que puedan ser objeto de subcontratación y, si ello fuera posible, la empresa con la que se vaya a subcontratar”. Si dicha circunstancia no se hubiera previsto en el contrato, deberá procederse a su modificación posterior, conforme al artículo 22.3. Igualmente, en caso de que en el contrato no conste la identificación de la empresa subcontratista “será preciso que el encargado del tratamiento comunique al responsable los datos que la identifiquen antes de proceder a la subcontratación”.
- “Que el tratamiento de datos de carácter personal por parte del subcontratista se ajuste a las instrucciones del responsable del fichero”.
- Que el encargado del tratamiento y la empresa subcontratista formalicen el contrato previsto en el artículo 12 de la Ley Orgánica.

f) En cuanto a las medidas de seguridad que hayan de ser adoptadas por quienes realicen trabajos de tratamiento de datos por cuenta de tercero, habrán de ser, en principio, las mismas que las impuestas al responsable del



fichero, tal y como se desprende de lo previsto en los artículos 9 y 12.2 de la Ley Orgánica, detallando el artículo 82 del Reglamento el modo en que deberán implantarse las medidas.

g) En cuanto al ejercicio por los afectados de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, el artículo 26 del Reglamento dispone que “cuando los afectados ejercitasen sus derechos ante un encargado del tratamiento y solicitasen el ejercicio de su derecho ante el mismo, el encargado deberá dar traslado de la solicitud al responsable, a fin de que por el mismo se resuelva, a menos que en la relación existente con el responsable del tratamiento se prevea precisamente que el encargado atenderá, por cuenta del responsable, las solicitudes de ejercicio por los afectados de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición”.

h) Por último, según el artículo 12.4, “en el caso de que el encargado del tratamiento destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será considerado, también, responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente”, siendo, en consecuencia, de aplicación el régimen sancionador establecido en los artículos 43 y siguientes de la Ley, sujetando el primero de ellos al encargado del tratamiento a dicho régimen”.

Teniendo en cuenta estas aclaraciones, sería conveniente la introducción de un apartado en el Anteproyecto en que se aclarase el régimen de las terceras empresas que desarrollan servicios externalizados, sometiendo las mismas al régimen que se acaba de describir. Por ello se propone la inclusión del siguiente texto:

“Las terceras entidades que desarrollase por cuenta de las entidades aseguradoras actividades objeto de externalización tendrán la consideración de encargadas del tratamiento, debiendo sujetarse al régimen previsto para las mismas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y su normativa de desarrollo.”

XII

Por su parte, ya se ha señalado que el Anteproyecto debería igualmente contemplar las implicaciones que en materia de protección de datos podrían derivarse de la realización de operaciones de cesión de cartera o modificaciones estructurales previstas en la propia Ley.

Respecto de las cesiones de cartera, ya tuvo esta Agencia la ocasión de pronunciarse en el informe emitido en relación con el entonces Proyecto de Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, señalando lo siguiente:



“En relación con la cesión de cartera, y haciendo en primer lugar referencia a la que se produce entre entidades españolas, prevista en el artículo 23 del Proyecto, que reproduce el artículo 22 de la Ley 30/1995, el apartado 1 del mencionado precepto se refiere a la cesión del “conjunto de los contratos de seguro que integren la cartera de uno o más ramos en los que operen”, siendo la misma posible en caso de cumplirse los requisitos exigidos por el artículo 23.1, entre los cuales, el apartado a) exige, para que la cesión no sea causa de resolución de los contratos, que “la entidad aseguradora cesionaria quede subrogada en todos los derechos y obligaciones que incumbían a la cedente en cada uno de los contratos”.

Esta Agencia Española de Protección de Datos ha venido señalando de forma reiterada que en los supuestos en los que el responsable del tratamiento cesa en el tratamiento de los datos por transmitir en bloque la actividad a la que el tratamiento se refiere no existirá en puridad una auténtica cesión de datos, sino una sustitución en la persona del responsable del tratamiento, siempre que el transmitente de los datos no vaya a continuar en la mencionada actividad generadora del tratamiento, en términos similares a los previstos, en cuanto a la sucesión de empresa, en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores.

De este modo, siempre que la cesión se refiera a uno o varios ramos concretos, de modo que el cedente de la cartera no persista en la celebración de contratos relacionados con dicho ramo, subrogándose el cesionario de la cartera en todos los derechos y obligaciones de aquél, esta circunstancia únicamente implicaría una sustitución en la persona del responsable del tratamiento relacionado con dichos ramos de seguro, si bien es preciso indicar que ello conllevará dos consecuencias desde el punto de vista de la normativa reguladora de la protección de datos de carácter personal:

- En primer lugar, desde el punto de vista meramente formal, deberá procederse a la modificación de la inscripción de los ficheros en el Registro General de Protección de Datos, haciendo referencia al nuevo responsable del tratamiento y, en su caso, ubicación del fichero.*
- En segundo lugar, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, deberá informarse a los afectados de la identidad del nuevo responsable, lo que se logrará, en parte, mediante la publicación del acuerdo de cesión de cartera, al que se refiere el artículo 23.1 c) del Proyecto.*



Estas referencias no sólo deben considerarse aplicables a los ficheros relacionados con los seguros objeto de la cesión de cartera, sino a todos aquéllos vinculados con la cesión, como por ejemplo el de trabajadores, dado lo establecido en el artículo 23.1 d) del Proyecto.

Por su parte, el artículo 23.2 se refiere a los supuestos de cesión parcial, disponiendo que “También serán admisibles cesiones parciales de la cartera de un ramo en los supuestos que se determinen reglamentariamente, en cuyo caso los tomadores podrán resolver los contratos de seguro”.

Esta regulación coincide con el criterio mantenido por esta Agencia y ya señalado anteriormente dado que, al no coincidir en este caso los criterios de subrogación, la cesionaria únicamente podrá tratar los datos de las personas relacionadas con los contratos cedidos en caso de que persista la vinculación contractual entre aquéllos y la aseguradora, conforme prescriben los artículos 6.2 y 11.2 c) de la Ley Orgánica 15/1999.

*En todo caso, podría plantearse la conveniencia de establecer, de forma armonizada con la normativa de protección de datos de carácter personal, dado que el artículo 4.2 de la Ley Orgánica dispone que “Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos”, que **“La cesionaria únicamente podrá proceder al tratamiento de los datos de quienes no hubieran resuelto el contrato”**, dado que la falta de mención de esta circunstancia podría dar lugar al tratamiento ilícito de los datos de los seguros cedidos y resueltos para otros fines, tales como la oferta de publicidad de los productos correspondientes a otros ramos en que operase la entidad cesionaria, todo ello sin consentimiento de los afectados, con la consiguiente vulneración de la Ley Orgánica 15/1999.*

Lo que se acaba de indicar en cuanto a la cesión de cartera entre entidades española debe considerarse aplicable a los supuestos de cesión de cartera previstos en los artículos 50 y 79 del Proyecto.

Del mismo modo, la doctrina de la Agencia en relación con la cesión de cartera prevista en el artículo 21.1 debe considerarse aplicable a los supuestos de fusión, escisión y agrupación, regulados por el artículo 24 del Proyecto.”

Posteriormente a la realización del mencionado informe fue aprobado el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, cuyo artículo 19 establece una regla aplicable a nuestro juicio tanto en los supuestos de cesión de cartera como en los relacionados con la transformación, fusión y escisión de entidades aseguradoras a las que se refieren los artículos 109 a 112 del



Anteproyecto. Señala el artículo 19 que “En los supuestos en que se produzca una modificación del responsable del fichero como consecuencia de una operación de fusión, escisión, cesión global de activos y pasivos, aportación o transmisión de negocio o rama de actividad empresarial, o cualquier operación de reestructuración societaria de análoga naturaleza, contemplada por la normativa mercantil, no se producirá cesión de datos, sin perjuicio del cumplimiento por el responsable de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre”.

Esta regla debería ser igualmente aplicable a los supuestos mencionados, por lo que se propone la inclusión de un apartado en que se establezca lo siguiente:

“En los supuestos de cesión de cartera previstos en la presente Ley, así como en los de transformación, fusión o escisión de entidades aseguradoras a los que la misma se refiere no se producirá cesión de datos, sin perjuicio del cumplimiento por el responsable de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.”

XIII

Por último, el Anteproyecto sometido a informe establece un régimen específico en relación con el funcionamiento y los deberes de información relacionados con la supervisión de las entidades aseguradoras integradas en un Grupo, partiendo del hecho de que determinadas actividades aseguradoras deberán ser llevadas a cabo necesariamente por entidades con personalidad jurídica diferenciada.

El ejercicio de las competencias supervisoras en relación con los Grupos llevará necesariamente aparejado que por parte de los mismos se proceda al intercambio de determinada información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones que vinculan a los Grupos con el supervisor, lo que supondrá necesariamente la cesión intragrupo de datos de carácter personal para el cumplimiento de tales obligaciones.

Es decir, cabe considerar que de tales obligaciones se deriva la existencia de una habilitación legal para la cesión de datos a la vista de lo dispuesto en el artículo 10.a a) del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, que considera amparada por la Ley la cesión de datos que sea necesaria para el cumplimiento de un deber impuesto por una norma con rango de Ley o por una norma de derecho comunitario.

Ahora bien, de conformidad con lo que se ha venido indicando a lo largo de los distintos apartados del presente informe, será necesario para que dicha cesión resulte plenamente conforme a la legislación de protección de datos que aquélla sea plenamente respetuosa con los principios consagrados por la Ley,

y en particular con los de finalidad y proporcionalidad a los que tantas veces se ha hecho referencia.

Ello supondrá que el intercambio de la información en el seno del Grupo debería limitarse a los datos que resulten adecuados, pertinentes y no excesivos para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las competencias de supervisión establecidas en la Ley y que los datos únicamente puedan ser empleados por las entidades integrantes del Grupo para el cumplimiento de esos deberes, sin que sea posible, sin consentimiento del interesado, utilizar los datos a los que se hubiese accedido en el ámbito de esta habilitación para otras finalidades distintas, como sucedería, por ejemplo, en caso de que una entidad del ramo de vida pretendiera utilizar los datos de otra entidad de distinto ramo para ofrecer a sus clientes seguros de vida.

A la vista de lo que se ha venido indicando, se considera procedente la inclusión en el Anteproyecto de un apartado en que se haga referencia a los supuestos de cesión de datos en el seno del Grupo, en los siguientes términos:

“Las entidades aseguradoras que formen parte de un Grupo a los efectos previstos en el Título V de la presente Ley podrán intercambiarse sin necesidad de contar con el consentimiento del interesado los datos de carácter personal que resulten necesarios para el cumplimiento de las obligaciones de supervisión establecidas en esta Ley. Los datos no podrán utilizarse para ninguna otra finalidad si no se contase con el consentimiento específico del interesado para ello.”

XIV

A la vista de todo lo que se ha venido señalando a partir del apartado VII del presente informe, se propone la inclusión de una nueva Sección 5ª en el Capítulo VII del Título III del Anteproyecto, en el que se recojan las normas de protección de datos aplicables al tratamiento de los mismos efectuado por las entidades aseguradoras que se han venido describiendo. La estructura de dicha Sección, que se iniciaría en el artículo 122 del Anteproyecto, incluyéndose los actuales artículos 122 y 123 del mismo en una nueva Sección 6ª, sería la siguiente:

“Sección 6ª. Protección de datos de carácter personal.



Artículo 122. Reglas aplicables a determinados tratamientos de datos.

1. Las entidades aseguradoras podrán tratar los datos de los tomadores, asegurados, beneficiarios o terceros perjudicados, así como de sus derechohabientes sin necesidad de contar con su consentimiento a los solos efectos de garantizar el pleno desenvolvimiento del contrato de seguros y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley y sus disposiciones de desarrollo.

El tratamiento de los datos de las personas antes indicadas para cualquier finalidad distinta de las especificadas en el párrafo anterior deberá contar con el consentimiento específico de los interesados.

2. Las entidades aseguradoras podrán tratar sin consentimiento del interesado los datos relacionados con su salud en los siguientes supuestos:

c) Para la determinación de la asistencia sanitaria que hubiera debido facilitarse al perjudicado cuando la misma haya de ser satisfecha por la entidad.

d) Para el adecuado abono a los prestadores sanitarios o el reintegro al asegurado o sus beneficiarios de los gastos de asistencia sanitaria que se hubieran llevado a cabo en el ámbito de un contrato de seguro de asistencia sanitaria.

El tratamiento de los datos se limitará en estos casos a aquéllos que resulten imprescindibles para el abono de la indemnización o la prestación derivada del contrato de seguro. Los datos no podrán ser objeto de tratamiento para ninguna otra finalidad, sin perjuicio de las obligaciones de información establecidas en esta Ley.

Las entidades aseguradoras deberán informar al asegurado, beneficiario o al tercero perjudicado acerca del tratamiento y, en su caso, de la cesión de sus datos de salud, en los términos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

3. Las entidades aseguradoras que formen parte de un Grupo a los efectos previstos en el Título V de la presente Ley podrán intercambiarse sin necesidad de contar con el consentimiento del interesado los datos de carácter personal que resulten necesarios para el cumplimiento de las obligaciones de supervisión



establecidas en esta Ley. Los datos no podrán utilizarse para ninguna otra finalidad si no se contase con el consentimiento específico del interesado para ello.

4. Las entidades aseguradoras podrán comunicar a las entidades reaseguradoras, sin consentimiento del tomador del seguro o asegurado, los datos que sean estrictamente necesarios para la celebración del contrato de reaseguro, en los términos previstos en el artículo 77 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.

La cesión de dichos datos para cualquier finalidad distinta de la establecida en el párrafo anterior requerirá el consentimiento del interesado.

Artículo 123. Tratamiento de datos en supuestos de externalización, cesión de cartera y modificaciones estructurales

1. Las terceras entidades que desarrollase por cuenta de las entidades aseguradoras actividades objeto de externalización tendrán la consideración de encargadas del tratamiento, debiendo sujetarse al régimen previsto para las mismas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y su normativa de desarrollo.

2. En los supuestos de cesión de cartera previstos en la presente Ley, así como en los de transformación, fusión o escisión de entidades aseguradoras a los que la misma se refiere no se producirá cesión de datos, sin perjuicio del cumplimiento por el responsable de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

Artículo 124. Ficheros comunes.

1. Las entidades aseguradoras podrán establecer ficheros comunes que contengan datos de carácter personal para la liquidación de siniestros y la colaboración estadístico actuarial para permitir la tarificación y selección de riesgos y la elaboración de estudios de técnica aseguradora. La cesión de los citados datos no requerirá el consentimiento previo del afectado, pero sí la comunicación a éste de la posible cesión de sus datos personales a ficheros comunes para los fines señalados, con expresa indicación del responsable, para que se puedan ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y **oposición** previstos en la ley.

2. También podrán establecerse ficheros comunes cuya finalidad sea prevenir el fraude en el seguro sin que sea necesario el



consentimiento del afectado. No obstante, será necesaria en estos casos la comunicación al afectado, en la primera introducción de sus datos, de quién sea el responsable del fichero y de las formas de ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación **y oposición**.

3. En todo caso, los datos relativos a la salud sólo podrán ser objeto de tratamiento con el consentimiento expreso del afectado.

Artículo 125. Otras normas de protección de datos de carácter personal

1. En la información que habrá de facilitarse al tomador del seguro conforme al artículo 118 de esta Ley deberá igualmente incorporarse la que, en relación con el tratamiento de sus datos personales, establece el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

2. Las entidades aseguradoras deberán proceder inmediatamente a la cancelación de los datos que le hubieran sido facilitados con anterioridad a la celebración de un contrato si el mismo no llegara a celebrarse a menos que contasen con el consentimiento específico del interesado, que deberá ser expreso si se tratase de datos relacionados con la salud.”